

Editorial

COLOMBIA, CONFLICTO INTERNO Y POLITQUERIA EN LA CAMPAÑA ELECTORAL

Lo que está ocurriendo en el país no es extraño si se miran los hechos con el lente de la verdad. Dos fenómenos que sin ser los únicos, porque son muchos más, están incidiendo profundamente en la marcha y el ponen en peligro el futuro, requieren del esfuerzo de todos en la actualidad y convertirlos en propósito nacional para superarlos.

El conflicto social y armado que está siendo negado para ocultar su esencia de clase y responsabilidad histórica de los dueños del poder, es uno y la descomposición moral de la nación que refleja la crisis de valores, de confianza y credibilidad en la política y la gestión pública, es el otro.

No son fenómenos nuevos, pero en este gobierno se han hecho más explícitas las contradicciones de clase y la descarada la politiquería de la casa de Nariño. El proceso de aprobación de la ley de reelección y la de perdón a los narcoparamilitares son evidencias indiscutibles.

La politiquería se está viendo con más claridad en esta campaña electoral del candidato-presidente. No tiene resultados para mostrar como solución a los grandes problemas de las mayorías de la nación, ni siquiera ha logrado éxitos significativos en la guerra en que se consumen los recursos que pertenecen a las comunidades.

Solo tiene para mostrar las gabelas que dio a los gremios e hizo más ricos a los ricos, la ley de "purificación" que convirtió en actores políticos a convictos narcotraficantes y la obediencia servil a los intereses del imperio.

La desmovilización de los narcoparamilitares, a la que tanto realce le está dando el gobierno para embrujar al país, por la forma como se está haciendo va a sumar más dolores de cabeza que beneficios. Los premiados son los patrones, mientras que muchos de los sicarios contratados se reproducirán en pequeños grupos delincuenciales para continuar haciendo lo que saben, matar a sueldo.

A pesar del triste balance de resultados de Uribe Vélez, es significativa la ventaja que tiene como jefe del gobierno, pues tiene a su favor las dos más grandes empresas electorales conocidas en el país: la de los gremios económicos y la de los "patrones" de la motosierra. En las pasadas elecciones (año 2002), le dieron la presidencia y le pusieron mayorías en el Congreso.

En esta campaña, como hizo en la anterior, pone al centro la guerra para resolver el conflicto social y armado. Lo novedoso de su estrategia es que niega la existencia del conflicto evidente e histórico, pretende eliminar el concepto de delito político de la legislación colombiana y califica el problema existente de "amenaza terrorista", siguiendo los pasos a mister Bush.

La campaña está diseñada con perfidia como se deduce de la directiva presidencial que prohíbe se hable en Colombia de "conflicto armado", incluso a las instituciones internacionales que están en el país les exige que en sus informes hablen de "amenaza terrorista". Abusivo e irrespetuoso, traza pautas a los funcionarios de otros gobiernos para que escriban lo que el dictador quiere.

Su campaña está repleta de falsedades e incoherencias. Mientras que califica de terroristas a quienes luchamos por los cambios del país y contra la injusticia social, los crímenes atroces y el tráfico de droga de los narcoparamilitares, amigos del Presidente, son calificados como delito político en la reciente ley de "justicia y paz" aprobada bajo presión.

Lo que está en el fondo del galimatías es el intento de borrar el carácter de clase y las raíces del conflicto social y armado, con cerca de dos siglos de existencia. Y ocultar la historia de la acumulación capitalista que se origina en las guerras y los conflictos internos entre fracciones de la oligarquía, y entre éstas con los trabajadores, campesinos y minorías étnicas que han pagado con sangre la esperanza de vivir mejor.

La guerrilla colombiana hoy tiene más de cuarenta años de experiencia acumulada, se ha consolidado en la confrontación y la lucha junto al pueblo, defendiendo sus banderas. Los combatientes del ELN nos levantamos en armas contra el Estado desde 1964, obligados por esta oligarquía que impide desde el poder que tiene estructurado, los cambios y transformaciones económicas, políticas y sociales que el país necesita para que los colombianos vivamos con dignidad.

Nuestra lucha es por cambios sociales y la refundación del Estado, para que éste sea verdadero garante de paz, de justicia social, de democracia real, de desarrollo en función del bienestar general y de la soberanía nacional, para que los colombianos tengamos futuro.

Esa es la razón de ser y los fundamentos de la lucha del ELN. Esos propósitos son la base de la propuesta de nuevo país a construir y pensado entre todos, de la solución política al conflicto que venimos planteando. El propósito humanista en el ELN es claro y firme.

Las veces que hemos dialogado sobre la paz con tres gobiernos distintos, lo hemos hecho desde esa postura y con transparencia.

No se ha avanzado en los intentos porque gobierno y guerrilla partimos de puntos de inicio y llegada distintos, porque los gobiernos representan intereses particulares y no los del país nacional y tienen secuestrada la paz y condicionan

los avances a los intereses de las minorías que quieren una paz, pero al menor costo para ellos.

El gobierno de Uribe Vélez ha lanzado reiteradas propuestas de diálogo al ELN en los últimos meses. Al inicio de su gobierno exploramos la posibilidad de abrir los diálogos durante cuatro meses, pero en sus planteamientos está ausente el interés de avanzar hacia la solución real del conflicto y llegar a la paz con justicia social. Esto no ha cambiado. Lo nuevo son los condicionamientos que pone, exigiendo iniciar con lo que debe ser el fin del proceso.

La propuesta hacia el ELN no es sincera con el país. Obedece a sus intereses políticos inmediatos y a la justificación del camino de guerra en que está comprometido. En estos tres años de mandato dejó en evidencia que carece de política y método para construir la paz con el movimiento insurgente, su autoritarismo en vez de acortar, alarga distancias y cierra posibilidades.

El ELN tiene una propuesta de paz y está dispuesto a abrir el diálogo sobre la solución política al conflicto interno, en el momento que las condiciones políticas lo hagan viable. Esta voluntad no es sinónimo de debilidad ni de cansancio, sino de búsqueda de caminos de reencuentro y de posibles acuerdos para el bien y en interés del país.

Bien equivocados están los que piensan que estamos a punto de "tirar la toalla" y nos invitan a subir al bus antes que nos deje, o los que nos dicen que ya pasó la década del sesenta, como si la lucha de clases hubiese desaparecido de la faz de la tierra.

Abrir un diálogo para buscar soluciones al conflicto es apenas un paso que no significa que la paz esté a la vuelta de la esquina y que ésta se construya a base de gestos de buena voluntad de la insurgencia y buenas intenciones del gobierno.

Los problemas que están en el fondo del conflicto son grandes y complejos, requieren de tino, paciencia y sabiduría para encontrar las soluciones apropiadas. El hecho que no se llegue a un acuerdo y se levante la mesa por falta de aproximaciones, no se puede interpretar como falta de voluntad política.

Equivocaciones de este tipo son perjudiciales. Los medios que editorializan sobre la paz con perfidia o presionando, representando la minoría que quiere la paz con el menor costo, para que el país siga igual, torpedean y siembran de espinos y desconfianzas el camino.

El país tiene el reto de repensar cómo construir la paz. Para ello hay que empezar por entender el fondo del conflicto, participar en la construcción de un proceso colectivo que brinde espacios para el reencuentro, sane heridas y facilite la reconciliación entre los colombianos. Esta tarea no puede ser obra exclusiva y dejarse en la mano de gobiernos comprometidos con los intereses de quienes se oponen a que el país cambie, como ha sido hasta ahora.

Es el momento de construir una fuerza comprometida con la solución política al conflicto interno, con una propuesta vinculante que ponga al centro resolver los

grandes problemas de Colombia, es decir las causas que están en el fondo del conflicto social y armado.

El ELN sigue creyendo posible la paz real y duradera como fruto de grandes cambios y de la construcción colectiva, donde el pueblo participe y esté representado en el mapa político de hoy. La solución política al conflicto y la construcción de la paz, es obra de todos. Juntos podemos lograrlo, es el camino, seguro.

Coyuntura Nacional

AHORA LA ORDEN ES PARAMILITARIZAR LA CIUDAD

Ante la mirada incrédula de nuestro país y del mundo, el terrorismo de Estado viene llenando cauces con sangre inocente, convirtiendo la cotidianidad popular en pánico a base de crímenes, saqueo e impunidad.

No podemos, por ningún motivo, dar la espalda a la memoria y permitir que el olvido producido por el terror, la enajenación y el aparente acomodamiento o alivio social, nos conduzcan a una indiferencia que no haga más que contribuir a la aberración de los que delinquen sin que sean sometidos a la justicia.

Colombia yace casi totalmente invadida por la fundamentalista estrategia paramilitar, hija legítima del terrorismo de Estado, que hace decenas de años viene cerrando el círculo con la pretensión de convertirla en una nación totalmente fascistizada.

El campesinado, desterrado de su tierra, está siendo exterminado. Los genocidios, las torturas, las detenciones selectivas y masivas, el robo descarado de propiedades a trabajadores del campo, que hoy piensan legalizar desde Santa Fe de Ralito, constituyen un plan piloto a desarrollar en toda nuestra geografía.

El paramilitarismo, totalmente abalado, o mejor dicho, orientado por Bush, acatado por Álvaro Uribe Vélez, agitado, soterrado y promovido por más del 35% del Congreso de la República, apoyado y financiado por empresarios, terratenientes y empresas transnacionales, camuflado y reforzado por las Fuerzas Armadas colombianas, ha enfilado su tétrico accionar en una nueva fase de depredación en las ciudades, incluyendo la capital.

Medellín (capital de Antioquia), fue la primera ciudad víctima de este flagelo. La manera como iniciaron la estrategia, fue a través de la expansión de la mafia en los sectores más pobres de la ciudad.

Cabe decir que desde el comienzo de este siniestro plan han contado siempre con la protección y complicidad de las instituciones militares (ejército, policía, DAS, F-2 y miembros de la Fiscalía en todos los niveles).

Para financiar la ola de terror se lanzan a la consecución de recursos económicos. La población en general es extorsionada, al igual que centros comerciales grandes y pequeños, como los Sanandrecitos, centrales de abastos como la de Bogotá, hoteles y moteles, transporte público, droguerías, tenderos como los de

Barranquilla, quienes desde el año del 2003 casi diariamente son víctimas de asesinatos y destierros.

Hasta la misma delincuencia es perseguida u obligada a entregar gran parte de su botín y de paso los reclutan para ponerlos totalmente a su servicio.

En esa dinámica de ir avanzando en territorio y en espacios llegan a donde los politiqueros de oficio, quienes desde el primer momento logran simpatía ya que el bajo mundo los unifica. Estos políticos se encargan también de servir de puente para que sicarios del paramilitarismo lleguen y amenacen a políticos que mantienen una posición con rasgos éticos, logrando que algunos se inserten en la estrategia.

Luego de tejer toda la red, se lanzan impunemente a sembrar el miedo en la población. La violación a los derechos humanos se convierte en uno de sus trofeos. Los sindicatos, las universidades y colegios, los hospitales, las Ongs, las organizaciones populares, las alcaldías y gobernaciones, todos son víctimas de crímenes, extorsiones y persecuciones.

Incluso ya son muchas las administraciones municipales y departamentales que están seriamente involucradas en todo el proceso de paramilitarización urbana.

Medellín, Bogota, Barrancabermeja, Barranquilla, Cúcuta y Cali se consideran hasta el momento como las ciudades más azotadas por la estrategia paramilitar del presidente.

Los jóvenes siguen siendo los más afectados. Cientos de ellos han sido asesinados y desaparecidos. Las Comunas de Medellín, los barrios nororientales y occidentales de Barrancabermeja, las barriadas periféricas de Barranquilla, Cúcuta, Cali y sectores de Ciudad Bolívar, Altos de Cazucá, Soacha, Bosa, Usme, San Cristóbal, Kennedy y Tunjuelito, todos ellos barrios de Bogotá, dan testimonio desalentador.

La está juventud exiliada en su propia casa, en su misma cuadra, en su propio barrio. Allí donde quiera que esté llega el paramilitar a impedir el libre vivir, el poco que le queda a esta joven generación.

Mientras les estimulan la adicción a la droga para incrementar el mercado de ella, en muchos de los barrios les imponen toque de queda a partir de las seis de la tarde y hacen responsables a sus padres si la "ley" es violada, so pena de una multa y en el peor de los casos les quitan la vida.

La paramilitarización urbana está ensombreciendo los diferentes escenarios donde las organizaciones sociales construyen espacios de poder para mejorar la convivencia ciudadana, con experiencias autogestionarias, organizándose para exigir el respeto a sus derechos.

El conflicto social de nuestro país ha sobrepasado todos sus límites. En razón a esta crisis, los movimientos sociales y políticos hacen frente a la más descarnada ofensiva del gobierno de Álvaro Uribe y su "seguridad democrática".

Sistemáticamente este señor prosigue con la guerra sucia, vulnera constantemente el Estado de derecho, inicia en Santa Fe de Ralito el perdón a los más horribles crímenes del paramilitarismo y ahora, con la consabida impunidad garantizada y el apoyo irrestricto de todo el aparato militar del Estado, se vuelca con sus capos y sicarios a repetir la cruel historia que ha dejado en el campo.

Desde que hace casi dos años comenzó la farsa de las negociaciones con las pandillas de Mancuso y demás agentes de Estado y del narcotráfico, y durante este tiempo se han cometido más de quinientos crímenes y decenas de secuestros y desapariciones por cuenta del paramilitarismo.

Lo que se ve venir hacia adelante es el incremento de la guerra sucia en las principales ciudades donde existan empresas que despiertan el apetito de transnacionales y de oligarcas nacionales.

Con tal de continuar instaurando el modelo económico que responda a las políticas neoliberales y perpetuar el mandato presidencial, Uribe Vélez no escatimará esfuerzos en seguir paramilitarizando la nación.

Las ciudades también están siendo testigos de impunidad. Los “desmovilizados” que han contado con la favorabilidad de decretos y leyes aprobadas por la mayoría del Congreso, están dando rienda suelta a sus perversiones de tortura y motosierra en Barrancabermeja y en los cordones de pobreza que bordean a Bogotá.

Los grandes centros urbanos, que además siguen siendo repoblados por más de tres millones de desplazados internos, están en la obligación de continuar consolidando un fuerte movimiento popular, democrático y progresista, que logre presionar la solución política al conflicto social y armado.

Hacer frente a la ola de pánico que se extiende en los espacios rurales y ahora en los urbanos y exigir con más énfasis que se muestre la verdad al país y al mundo, que se haga justicia y se repare integralmente a las víctimas de la guerra sucia y de la “seguridad democrática” que tanto luto ha está representando, se hace necesario y urgente.

El terrorismo de Estado y su estrategia paramilitar sucumbirá solo si el pueblo en su conjunto lo afronta para derrotarlo. La paz será un logro de la unidad y la decisión de tener un futuro digno como nación.

Coyuntura Internacional

AMERICA LATINA CONTRA EL TERRORISMO DE ESTADO.

COLOMBIA NO SERA LA EXCEPCION

Al ser declaradas inconstitucionales por la Corte Suprema de Justicia de Argentina las leyes de la impunidad, llamadas de Punto Final y Obediencia Debida, se marca un punto de inflexión en América. Estas leyes fueron aprobadas para impedir la justicia, la verdad y la reparación que exigían los

luchadores argentinos por los derechos humanos y los familiares de los desaparecidos, torturados y asesinados durante las dictaduras militares.

En Argentina desaparecieron a más de 20.000 luchadores y familiares e hijos de estos hombres y mujeres que entregaron su vida por la libertad de su país y por las transformaciones que aún laten en la sociedad argentina.

Los militares impusieron estas leyes en 1986 y 1987, asegurando la impunidad a más de cuatro mil acusados, incluyendo la mayor parte de la alta jerarquía castrense por su responsabilidad en la sistemática represión que se desarrolló entre los años 1976 y 1982.

Campos de concentración, cárceles secretas, torturas y desapariciones, asesinatos, destierros, exilios obligatorios, robo de los hijos de los desaparecidos, fueron algunas de las barbaridades que hacían parte del plan de exterminio de la oposición democrática y revolucionaria argentina. Sin contar, en esta serie de crímenes, la participación de la dictadura en la sangrienta Operación Cóndor que articuló en el Cono Sur la represión contra los revolucionarios y demócratas de esos países.

Los argentinos están convencidos que este fallo de la Corte es un gran paso adelante. Pero aparte de juzgar a los payasos, los argentinos quieren juzgar a los dueños del circo. No solo a los militares, sino también a quienes los mandaron y se lucraron de las imposiciones económicas y laborales establecidas por la dictadura: el poder económico y político, nacional e internacional.

La imposición del modelo neoliberal que conlleva aún consecuencias desastrosas para el pueblo argentino empezó precisamente con las dictaduras de los Generales Jorge Rafael Videla y Roberto Viola y continuó con los gobiernos del capitalismo salvaje de Carlos Menem y su famoso Ministro de Hacienda Domingo Cavallo.

La crisis argentina se gestó en un lapso de 25 años. Argentina tocó fondo. Se desmanteló el parque industrial. Se privatizaron todos los servicios públicos y los recursos naturales estratégicos, entre ellos el petróleo. La deuda externa era de 5.500 millones en 1976, hoy se acerca a los 200.000 millones de dólares. Una deuda injusta, ilegal e impagable.

De una población de cerca de 40 millones, 18 millones de argentinos viven en situación de pobreza, 7 millones de ellos en la miseria, miles de niños son víctimas de la violencia social y mueren cerca de cien al día por hambre y enfermedades evitables, en un país que, entre otros resultados, es el segundo productor de trigo del mundo.

Las dictaduras son funcionales al capitalismo neoliberal. Con Augusto Pinochet los dictadores argentinos fueron los alumnos estrellas de los economistas llamados Chicago Boys, impulsando a rajatabla las doctrinas fundamentalistas de Milton Friedman, que impusieron la ruina en Argentina y tienen en una pobreza cada vez más creciente al pueblo chileno.

Parece que la lucha por la verdad y la justicia en Argentina va a ir más allá de las terribles violaciones contra los derechos humanos durante el tiempo de las dictaduras.

El ministro de defensa del gobierno de Néstor Kischner sentenció que "si no hay verdad, no hay perdón y sin justicia no hay verdad", al conocer del fallo de inconstitucionalidad de las leyes de la impunidad.

Estas palabras parecen escritas para Colombia.

A contravía, como ya es costumbre, el gobierno de Álvaro Uribe, sigue urdiendo la impunidad para sus huestes políticas. La ley pérfidamente titulada de Justicia y Paz, que implicará la más alevosa injusticia, ya fue aprobada por el Congreso paramilitarizado de la República de Colombia. Solo falta la firma del candidato presidente, Uribe Vélez.

El proceso de reinserción de los grupos paramilitares de Santa fe de Ralito, (donde se negocia la amnistía a sus capitales y a sus crímenes) en lugar de dar cuenta de estos asesinatos, ha reforzado su influencia y ahora controlan impunemente diversos espacios de la vida nacional.

Aparte de salvaguardar a los ejércitos ilegales de la motosierra, Uribe se concentra en esconder los demostrados lazos de las hordas paramilitares con el ejército oficial de Colombia, negando la responsabilidad estatal en el desarrollo de esta estrategia contrainsurgente. Más aun, con la estructura clandestina del terrorismo de Estado del cual hacen parte las llamadas Autodefensas Unidas de Colombia.

La cúpula militar colombiana, al igual que la argentina, tendrá más temprano que tarde que enfrentar el peso de la verdad y de la justicia. Son decenas de miles los colombianos asesinados y ultrajados por cuenta de estos militares, para los cuales el honor no existe.

Una política verdadera de paz daría cuenta de todos estos crímenes de Estado, rompería con la impunidad y crearía un ambiente de paz, donde la justicia, la verdad y la reparación sellarían esta etapa de ignominia que nos impuso esta oligarquía liberal conservadora y situaría al país en la corriente progresista del continente.

Acaba de celebrarse en La Habana el Encuentro Internacional "Contra el terrorismo, por la verdad y la justicia", que definió, entre otras resoluciones, establecer un Observatorio contra el Terrorismo en el Hemisferio, crear una Base de Datos que recopile información sobre esta política genocida, elaborar y publicar la Enciclopedia del Terrorismo en el hemisferio y conformar una colección de publicaciones sobre la memoria histórica del terrorismo.

Además se constituirá el Tribunal Hemisférico "Contra el terrorismo y en defensa de la Humanidad", conformado por prestigiosos juristas, intelectuales y luchadores por los derechos humanos para juzgar, en primer término, a Henry Kissinger, a los Bush, padre e hijo y a los funcionarios y exfuncionarios del Departamento de Estado y del Consejo Nacional de Seguridad: Oliver North, John Dimitri Negroponte y Otto Reich, por instaurar y promover el terrorismo de

Estado en América Latina y el Caribe y en el propio territorio de los Estados Unidos.

Colombia no puede estar ausente de este esfuerzo continental de los mejores intelectuales y luchadores por los derechos humanos y por la dignidad de nuestras tierras. En estos momentos el terrorismo de Estado está vivo y con patente de corso en nuestra patria. Precisamente ese es uno de los bastiones sobre los cuales se fundamenta el poder de esta sangrienta oligarquía que des gobierna el país a su antojo y para sus intereses.

La impunidad y las leyes que impiden que la justicia se establezca para que de ella florezca la libertad, ya empezaron a caer en el continente y Colombia no será una excepción en esa tendencia.

Coyuntura Internacional

BOLIVIA: EJERCICIO DE PODER POPULAR

Los campesinos, mineros, indígenas, maestros, estudiantes de Bolivia han dado desde hace más o menos cinco años un ejemplo de cómo defender el patrimonio de un país.

Para los pueblos originarios la tierra es sagrada pues es ella la que brinda el sustento y guarda las riquezas para la preservación de la vida. Los bolivianos son en gran mayoría Aimaras y Quechuas, habitantes de este territorio desde tiempos inmemoriales, se saben por tanto, hijos de esa tierra, parte de ella y por defenderla están dispuestos a todo.

Esa razón profunda, proveniente de su concepción del mundo, los ha llevado levantarse en lucha contra la devastadora invasión de las transnacionales. En el año 2000 libraron la "Guerra del Agua", en el 2003 derrocaron al gobierno neoliberal a ultranza de Gonzalo Sánchez de Lozada y en lo corrido entre el 2004 y 2005, han realizado numerosas protestas para rechazar las medidas del gobierno de Carlos Mesa.

Desde este 6 de mayo se movilizaron en diferentes partes del país en torno a dos reivindicaciones principales: la nacionalización definitiva de los hidrocarburos y una nueva constitución para refundar el país.

Los bolivianos se propusieron derrocar al presidente Carlos Mesa pues no respetó la voluntad soberana del pueblo y su gobierno fue una continuación de los anteriores.

El arrollador espíritu neoliberal que insufla de diversos modos el gobierno yanqui hizo que no solo Mesa, sino la oligarquía se olvidaran demasiado pronto de lo ocurrido en octubre del 2003, cuando fue depuesto Gonzalo Sánchez de Lozada.

Este potente movimiento no solo logró la renuncia del presidente, sino que impidió también que Hormando Vaca Díez (presidente del Senado) o Mario Cossío (presidente de la cámara de diputados), perteneciente a la misma camarilla neoliberal asumieran el gobierno.

Además denunciaron e hicieron abortar un golpe militar urdido por la derecha civil y militar como salida a la profunda crisis política y social. De igual manera han repudiado el intervencionismo norteamericano y han puesto en su lugar al embajador de ese país, al recalcarle que los problemas de Bolivia los arreglan los bolivianos.

También tienen claridad de cómo el apetito petrolífero de la élite gobernante de Estados Unidos está incidiendo directamente sobre los terratenientes y empresarios de las provincias de Santa Cruz de la Sierra, Tarija, Beni y Pando para separarlas del resto del país y así poder disponer a sus anchas de estos territorios y sus enormes reservas de hidrocarburos.

Las transnacionales Repsol, British Petroleum, Enron y Shell están apoyadas por sus gobiernos y dispuestas a entregar cualquier cantidad de dólares para financiar los llamados Comités Cívicos que lideran a los separatistas y la formación de grupos paramilitares, como la denominada Unión Juvenil Cruceñista que ya se estrenó hiriendo a golpes de garrote a seis campesinos y luego celebrándolo con toda impunidad en la plaza principal de Santa Cruz.

Los terratenientes y empresarios que pretenden separar las cuatro provincias, no solo han amenazado con armarse sino que lo están haciendo, apoyados por el gobierno yanqui en todos los sentidos.

El imperio es ducho en la táctica de separar territorios y utilizar paramilitares para lograr sus objetivos estratégicos. La historia de nuestra América nos brinda varios ejemplos. Los colombianos de bien recordamos la historia de cómo fue la separación de Panamá en 1903, para tomar bajo su dominio la zona del canal y vivimos la tragedia de la guerra sucia actual.

El poderoso movimiento popular boliviano tiene clara la maniobra.

Por otro lado hay un hecho significativo. En un sondeo sobre la nacionalización de los hidrocarburos, organizado por periodistas y realizado en La Paz, El Alto, Santa Cruz y Cochabamba, el mayor porcentaje de personas a favor de esta medida se obtuvo justamente en Santa Cruz (78,9%), mientras que en las otras ciudades hubo un promedio de 75,7%.

En toda esta heroica y digna demostración de soberanía y poder que han realizado grandes sectores de la sociedad boliviana, el Pacto de Unidad entre las diferentes organizaciones campesinas, mineras y populares fue un factor fundamental para triunfar.

Esta es sin duda una experiencia que cimentará la posibilidad de un proyecto alternativo para los bolivianos, donde se respete su cultura, su cosmogonía ancestral.

Si bien el movimiento está en una tregua en espera de la renuncia de los congresistas y la convocatoria a nuevas elecciones, se mantiene alerta frente a cualquier maniobra o traición a su voluntad. Con creces han demostrado que tienen el poder en sus manos y que el gobierno que asuma debe respetar la voluntad popular.

Este estado de alerta también incluye la posible intervención militar directa de tropas de EEUU o por parte de una fuerza multinacional, utilizando como pretexto la guerra civil en que puede desembocar la pretensión separatista de las cuatro provincias mencionadas.

Hay una situación muy peligrosa en Bolivia. El imperio amenaza nuevamente y no declina en sus intenciones de apoderarse de las riquezas que pertenecen a los pueblos.

La profundización de la conciencia de los bolivianos en cuanto a que las riendas del destino de un pueblo no pueden estar en manos de una minoría con larga historia de traiciones y mezquindades, desarrolla el potencial del poder popular.

Esta experiencia es una lección ineludible en estos tiempos de voracidad capitalista.

Debemos aprender cómo se defiende la soberanía y cómo esta reside en cada persona que se reclame con la nacionalidad de su país.

Los colombianos estamos ante el enorme reto de defender nuestros recursos naturales, seriamente amenazados por las privatizaciones y el TLC, nuestra patria y nuestro futuro.

Bolivia, con sus particularidades históricas y culturales, nos ha enseñado que es posible cuando hay conciencia y decisión.

